

do capital y sueldo anual de mil pesos en adelante, con cuya disposicion dicen, se falta á la equidad y proporcion mandada por la fraccion 2ª art. 31 de la Constitucion federal, puesto que se exceptúan de pagar ese impuesto los capitales menores de mil pesos, habiéndose además faltado á lo que dispone la fraccion 3ª art. 30 de la Constitucion reformada del Estado, porque el impuesto que se versa, en caso de decretarse, debió, segun esta disposicion, haberlo sido en el primer período de sesiones ordinarias y no como lo fué en el último, de todo lo cual infieren los quejosos que ha habido de su parte, por el decreto mencionado, violacion de garantías individuales y procede el amparo que pretenden. Visto el informe del Tesorero responsable, contrainforme á que en sus operaciones respecto de los promoventes se ha reducido al cumplimiento del referido decreto, como causantes morosos; y en virtud del art. 7º del reglamento respectivo; el pedimento del Promotor fiscal sosteniendo la improcedencia del amparo; el alegato de los interesados, insistiendo en obtenerlo; y la sentencia del Juez de Distrito que lo otorga. Considerando: que el decreto núm. 119 de la Legislatura de Sinaloa, está expedido por autoridad competente en la órbita que le demarca la Constitucion de la República, puesto que la contribucion que establece es proporcional y equitativa entre todos los causantes que definen las circunstancias á que se refiere; y que en tal concepto no hay garantía violada ni procede el recurso promovido con arreglo á la ley de 20 de Enero de 1869, se resuelve:

Primero: es de revocarse y se revoca la sentencia del Juez de Distrito de Sinaloa, pronunciada en 25 de Mayo próximo anterior, en la parte que dice: «La justicia de la Union ampara y protege, contra el decreto de 5 de Abril último expedido por el II. Congreso del Estado, á los nacionales y extranjeros que lo han solicitado, y son el Lic. Francisco Romanillos por sí, y

con poder de Antonio Peña por sí, por la firma Peña y Cª de que es socio, y por D. Diego Peña, Fermin Irigoyen, Dª Rosa Arreola de Quevedo, Sanchez y Sewells, representados por su socio D. Juan Lewells, Ignacio Guerrero por sí, por Guerrero y Cª de la Noria de que es socio principal, y con poder de D. José Vicente Lavcaga de San Francisco, testamentaria del finado D. Manuel Rubio, F. Heyman y Cª representados por D. Carlos Wolguardson y Mateo Magaña.»

Segundo: la justicia de la Union no ampara ni protege á los quejosos, contra el decreto mencionado de la Legislatura dicha.

Devuélvanse sus actuaciones al Juzgado de que proceden, con copia certificada de este fallo para los efectos consiguientes; publíquese y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados-Unidos mexicanos y firmaron.—S. Lerdo de Tejada.—Pedro Ogazon.—Juan J. de la Garza.—Ignacio Ramirez.—M. AUSA.—S. Guzman.—Luis Velaquez.—M. Zavala.—J. Garcia Ramirez.—Luis Maria Aguilar, secretario.

Son copias que certifico. México Junio veintiocho de mil ochocientos setenta y uno.—Agustin Peralta, oficial mayor.

AMPARO.

Juicio promovido por varios comerciantes nacionales y extranjeros ante el Juzgado de Distrito de Sinaloa, contra el ciudadano Tesorero general de este Estado, que les exige el medio por ciento que impone el decreto número 119 de la Legislatura del Estado, de 5 de Abril último.

PEDIMENTO DEL CIUDADANO PROMOTOR FISCAL.

El Promotor fiscal accidental dice:

Que está muy bien impuesto de que el presupuesto de ingresos del Estado basta para cubrir el de egresos ordinarios, de antemano establecidos, y sobra mensualmente una cantidad muy considerable para crearse un fondo á fin de atender á las circunstancias anómalas que con frecuencia han tenido lugar en varias poblaciones foráneas; y aun á edificar penitenciaras; establecer escuelas que no hay ni en Mocorito, construir caminos; fincar una casa para el palacio del Gobierno, que no la tiene; y por último, otras mejoras de primario interés público, sin necesidad de apelar á la odiosa cantinella de contribuciones extraordinarias, que con cualquier frívolo pretexto, como el pequeño movimiento de Andrade, invocan los Legisladores del Estado su consabido estribillo para extorcionar un poco y hacerse de recursos que se necesitan en la actual época de agitacion electoral, como lo dicen menos claro los preliminares del decreto 114 de dicha Legislatura, que corre agregado á fojas 9 de este expediente.

¿Tiene la culpa el propietario, el comerciante y todo empleado de que no haya en las arcas del Estado la existencia que era de esperarse? Si no la hay, ¿en que consiste? ¿Tiene la culpa el propietario y el comerciante de que los altos funcionarios sean morosos en exigir de los recaudadores foráneos el exacto cumplimiento de sus deberes? Es público y notorio á todo sinaloense que en los Distritos foráneos no se recauda ni la quinta parte de las contribuciones decretadas en el presupuesto de ingresos: ¡que digo! no ha muchos dias fué denunciado por la prensa de esta Capital, el hecho de que el Tesorero municipal de la Villa del Fuerte, aprehendió como contrabando mas de 40 barriles de vino mescal que resultaron ser del Administrador y recaudador de rentas del mismo Distrito. Este hecho no necesita comentarios, y desde luego puede conocerse como cumplen los empleados de 2º orden en el ramo hacendario con las obligaciones de su destino, ¿Y se quejan los Diputados

de que el "erario del Estado está actualmente exhausto y sin ingresos."

Los legisladores pues, para prevenir enojos de sus comitentes; y tener con que subvenir á los gastos ordinarios y extraordinarios, tienen el remedio de procurar la estricta vigilancia á sus dependientes, á fin de conseguir lo que segun el presupuesto de ingresos debe dar la propiedad raíz y moviliaria de la Capital y de los Distritos; y es evidente, que desterrando el favoritismo y el desimulo del contrabando, se consigue, que á mas de pagar la lista de los empleados de todas clases y categorías con la regularidad que mandan la justicia y lo equidad, tendria la Tesoreria general un fondo muy considerable para subvenir á las atenciones extraordinarias. Pero toda vez que lejos de haber ese fondo se estan debiendo sus sueldos á los empleados de esta Capital de mas de dos meses y hasta doce meses á los foráneos, los propietarios y los comerciantes tienen sobrada razon de alzar su voz contra tan desconsiderados representantes del pueblo sinaloense en el Congreso del Estado, que por no remediar oportunamente y reprimir un delito, decretan otro mal; pues es indudable que esa contribucion es el resultado de un punible disimulo, y una fatalidad que á ningun diputado le dé lástima que con lo sávia del pueblo estén muchos abusando.

Lo dicho equivale, á que no han sabido los representantes del pueblo en el Congreso particular, ejercitar debidamente los derechos de sus comitentes; pero proclamando la soberanía del Estado, han podido decretar la contribucion de que se quejan los ciudadanos que piden el amparo y proteccion de la justicia federal; y en concepto del Promotor que suscribe, no está violado el artículo 21 en su fraccion 2ª como dicen los quejosos, (vease el artículo 41 de la Carta fundamental de la Nacion). Dicho código no ha prohibido las contribuciones extraordinarias en la República; solo ha querido que los gastos públicos se paguen

por todos "de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes."

Hay que lamentar, que habiéndose pedido quitar al Congreso el pretexto de que se valió para imponer una contribucion de tan pingües resultados, por ocho ó nueve mil pesos que se malgastaron en destruir á unos cuantos bandidos, no se hizo, pues bastaba que el jefe de las fuerzas de la Federacion que guarnecen esta plaza, hubiera tomado violentamente las providencias de su resorte para enviar expediciones á donde la humareda se levantaba; al fin esos soldados están eficazmente pagados sin gravamen del Estado; y no era lo mismo disponer de lo organizado que organizar para expedicionar; pero ya que dicho jefe no cumplió con su deber, el Congreso ha tenido una oportunidad de buen derecho y hay que respetarlo en él.

Por tanto, el Promotor concluye pidiendo que se determine este negocio con la siguiente proposicion:

La justicia de la Union no ampara ni protege á los individuos ocursantes contra el decreto número 119 de la Legislatura del Estado de Sinaloa, fecha 5 de Abril último, porque ésta ha obrado en uso de su soberanía constitucional.

Mazatlan, Mayo quince de mil ochocientos setenta y uno.—(Firmado).—*Damian Ballesteros.*

Sentencia del Juez de Distrito.

Mazatlan, Mayo veintiseis de mil ochocientos setenta y uno.

Vistos. Oidos los alegatos y el pedimento fiscal. Considerando que el H. Congreso del Estado ha traslimitado sus facultades al decretar la contribucion del medio por ciento el 5 de Abril último. Que aunque segun el pacto federal, los Estados son soberanos en todo aquello que concierna á su régimen interior. Que sin embargo, esta soberanía está restringida por la Constitucion

general. Que es un deber de todas las autoridades, guardar y hacer guardar la Constitucion. Que este H. Congreso ha violado el artículo 31, fraccion 2ª seccion 2ª de la Constitucion general. Que es deber de los Tribunales de la Federacion, vigilar por la exacta observancia de la Constitucion; hacer cumplir sus preceptos y amparar á todos los habitantes de la República contra toda violacion de cualesquiera autoridad que pretenda consumarla. Que el artículo 31 constitucional manda que todos los habitantes de la República contribuyan á los gastos de una manera *proporcional y equitativa*. Que esta proporcion y equidad se menosprecia en el decreto que impone la contribucion del medio por ciento con excepcion de los capitales que no excedan de mil pesos. Que no es equitativo hacer recaer el impuesto solo sobre una clase. Definitivamente juzgando y á nombre de la justicia federal, se falla bajo las siguientes proposiciones:

Primera. La justicia de la Union ampara y protege contra el decreto de 5 de Abril último expedido por el H. Congreso del Estado á los nacionales y extranjeros que lo han solicitado y son: Miguel G. Careaga por sí y por la firma Careaga y compañía de que es socio gerente, y como apoderado de D. Adolfo Thomalon, Teofilo Cascassus como apoderado de E. Burgueño, Cosme Arcoleta con poder de la testamentaria del finado Peimbert; D. Francisco Almeida apoderado de D. Line Lopez; C. Goldschmidt representando la firma Goldschmidt y Garvica de que es socio gerente, Carlos Woollrich representando la casa de J Kelly y compañía cuya firma usa y á nombre de la empresa de gas de Mazatlan, Carlos Passon como principal de la casa Melchers y sucesores, Manuel de la Quintana por la firma J. de la Quintana de que es socio, Adolfo Bartuing representando á Storzel Bartuing y compañía, Fortunato de la Vega á nombre de la casa F. de la Vega y compañía de que es principal, Rosendo Tames por la

firma Tames y Cazessus de la cual es socio gerente; y por sí, Andres Velarde, Evaristo Monroy, Morales y Beltran, Pablo Rites, D^a Tomasa Osuna, Manuel Hidalgo, Alfredo Howell y compañía, Liberato Alsua por la casa Alsua Doru y compañía, de la cual es principal, Arcenio Igual con poder, de D. Pedro C. de Igual, Marcial Lavin, Eduardo Beabeu, Beabeu Pugh y compañía representados por Etmundo Pugh socio gerente de dicha firma, Beherendt y compañía representados por Domingo Danglada, D^a Estefana Galindode Wollheien, Antonio Graso, Doroteo Quevedo, Manuel Enciso, y John Valeke representados todos por el Lic. D. Carlos F. Galan.

Segundo: Notifíquese y ejecútese, remítase copia de esta sentencia á los periódicos para su publicacion y otra copia certificada á la Suprema Corte de Justicia de la Nacion para que se inserte en el *Semanario Judicial*. Remítanse sin demora los autos á la Suprema Corte para su revision.

El primer suplente del Juzgado de Distrito lo decretó y firmó con los de asistencia. *Lic. Antonio Diaz Martinez.*—A.—*Miguel Salas.*—A.—*Ramon Lizárraga.*

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Junio veintiseis de mil ochocientos setenta y uno.

Visto el juicio de amparo promovido ante el Juzgado de Distrito de Sinaloa por los nacionales y extranjeros siguientes: Miguel G. Careaga por sí, y por la firma Careaga y compañía de que es socio gerente, y como apoderado de D. Adolfo Thomalon, Teófilo Cazessus como apoderado de E. Burguenio, Cosme Arriola, con poder de la testamentaria del finado Peimbert, Francisco D. Almeida apoderado de D. Lino Lopez, C. Goldschmidt representando la firma Goldschmidt y Gavica de que es socio ge-

rente, Carlos Woolrich representando la casa de J. Kelly y compañía cuya firma usa, y á nombre de la empresa de gaz de Mazatlan, Carlos Passon como principal de la casa Melchers sucesores, Manuel de la Quintana por la firma J. de la Quintana y compañía de que es socio, Adolfo Bartuing representando á Storzel Bartuing y compañía, Fortunato de la Vega á nombre de la casa, F. de la Vega y compañía de que es principal, Rosendo Tames por la firma Tames y Cazessus de la cual es socio gerente, y por sí, Andres Velarde, Felipe Mora, Ramon Iturralde, Evaristo Monroy, Morales y Beltran, Pablo Rites, Doña Tomasa Osuna, Manuel Hidalgo, Alfredo Howell por la firma Howell y compañía, Liberato Alsua por la casa Alsua Doru y compañía de la cual es principal, Arcenio Igual con poder de Don Pedro C. de Igual, Marcial Lavin, Eduardo Beaben, Beabeu Pugh y compañía representados por Etmundo Pugh socio general de dicha firma, Beherendt y compañía, representados por Domingo Danglada, Doña Estefana Galindo de Wollheien, Antonio Graso, Doroteo Quevedo, Manuel Enciso y John Valeke, representados todos por el C. Lic. Carlos F. Galan, pidiendo amparo contra el C. Tesorero General del Estado, que los exige el medio por ciento que impone el decreto núm. 119 de la Legislatura del Estado fecha 5 de Abril último, y Considerando: que este decreto está expedido por autoridad competente en la órbita que le demarca la Constitucion federal, puesto que la contribucion que establece es equitativa y proporcional entre todos los causantes que tienen las circunstancias á que se refiere; y que por lo mismo, no hay garantía violada, se declara.

Primero: Que se revoca la sentencia pronunciada el 26 de Mayo próximo pasado por el Juzgado de Distrito de Sinaloa que concede el amparo.

Segundo: Que en consecuencia la Justicia de la Union no ampara ni protege á los quejosos contra el acto del C. Tesorero Ge-

neral del Estado de Sinaloa, que les exige el pago del medio por ciento impuesto por el decreto núm. 119 de la Legislatura del Estado, expedido en 5 de Abril del presente año.

Devuélvanse sus actuaciones al Juzgado de que proceden con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes, publíquese por los periódicos y archívese á su vez el Toca.

Así lo decretaron por unanimidad de votos los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—(Firmados.)—*S. Lerdo de Tejada.*—*Pedro Ogazon.*—*Juan J. de la Garza.*—*José Arteaga.*—*J. M. Lafragua.*—*Pedro Ordaz.*—*Ignacio Ramírez.*—*M. Auza.*—*S. Guzman.*—*Luis Velazquez.*—*M. Zavala.*—*J. García Ramírez.*—*Luis María Aguilar*, secretario.

Son copias que certifico. México, Junio treinta de mil ochocientos setenta y uno.—*Agustín Peralta*, oficial mayor.

AMPARO.

Juicio promovido ante el Juzgado de Distrito de Durango por el C. Agustín Oliden, contra la resolución del Jefe político del Partido, C. Antonio Díaz, fecha 1º de Marzo último, en virtud de la cual fué condenado á perder el valor de unos efectos que se le empeñaron.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

El Promotor fiscal dice: que el C. Agustín Oliden, dueño de la casa de empeño, conocida por del "Año Nuevo" ha ocurrido ante vd. pidiendo amparo contra la providencia de la Jefatura política de esta capital, de 1º del corriente, que lo condenó á una multa de 125 pesos, á la devolución

de un catre y al pago de 16 pesos, valor de otro, por faltas al reglamento de montepíos de 8 de Marzo del año pasado. Cree el quejoso violadas en su persona las garantías que otorga la Constitución en su art. 20, fracciones 4ª y 5ª Suspensa por ese juzgado aquella providencia, en lo relativo á la multa, por versarse sobre ella solamente la queja, se siguió ejecutando en cuanto al pago de los 16 pesos; mas al practicarse el embargo, ocurrió de nuevo el interesado, haciendo extensivo á este punto su recurso, y alegando violación de los artículos 13 y 14. El Juzgado provoyó también la suspensión del embargo.

Los preceptos constitucionales alegados por el quejoso, no pueden tener, en concepto del Fiscal, aplicación alguna en el presente caso. Es evidente que el gobierno del Estado, ha tenido facultad para reglamentar las casas de empeño, y que ha podido por lo mismo, encomendar el cuidado de ellas á los Jefes de Partido, autorizándolos para corregir gubernativamente los abusos que se cometan. En el reglamento de que se trata, art. 14, se ha designado la multa desde 25 pesos hasta 200, ó la prisión, como castigo á los infractores del mismo reglamento, y de consiguiente la autoridad política, calificando bien ó mal un hecho que se le denunció contra el C. Oliden, y castigándole por él, ha obrado en el círculo de sus atribuciones.

El expediente que con tal motivo se formó, demuestra que el quejoso, tuvo á su disposición todos los medios de defensa que podía desear, pues se le dió término bastante para producir sus pruebas, y se le oyeron cuantos alegatos quiso hacer, practicando además la Jefatura de oficio, y para esclarecimiento del negocio, una información minuciosa. Tampoco se trataba de un juicio criminal. Así es, que ni se violó el art. 20 en sus fracciones 4ª y 5ª ni pueden tener aplicación oportuna en este asunto.

Tampoco la tienen los art. 13 y 14, por que no tratándose sino de una corrección